JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., veinticuatro de octubre de dos mil veintidós

Acción de tutela No. 11001 40 03 054 2022 00885 01

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 16 de septiembre de 2022 por el Juzgado 54º Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por YENNY PAOLA CELI TRIANA contra FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO; en la cual se vinculó al Ministerio de Educación Nacional e Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende la accionante el amparo de su derecho fundamental a la educación y, solicitó en consecuencia ordenarle:

“...a la Fundación Universitaria de conformidad a lo establecido en la Resolución Rectoral No. 01 (2021) de junio 30 de 2021 emanada por la rectoría. Por la cual se expide el procedimiento académico para certificar el nivel de inglés establecido como requisito de grado para estudiantes del nivel universitario de la “Fundación Universitaria San Mateo – San Mateo Educación Superior”, validar el resultado de las pruebas saber pro 2021, debido a que se realizó la validación de las pruebas saber pro 2018 con resultado de nivel A1 y no los resultados de las pruebas saber pro -2021 con nivel B2 (...)”

1.2. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó, en síntesis, que, desde el 11 de enero hogaño es estudiante activa del programa de administración de empresas en la Fundación Universitaria San Mateo, institución que exige como requisito de grado *“aportar certificación vigente expedida por entidad certificadora con competencias en ingles nivel B1”*.

Con fines a satisfacer dicho requerimiento, presentó en dos oportunidades la prueba saber pro, esto es, en el año 2018 y 2021, en esta última alcanzó el puntaje 206 equivalente al nivel de desempeño B2. Por tal razón, solicitó a la universidad accionada que el anterior resultado fuera validado como requisito de grado.

Empero, el 16 de junio del año en curso, la universidad convocada, le negó dicho pedimento aduciendo que no reunía las condiciones previstas en la Resolución Rectoral No. 1 del 2021, esto es, tener la calidad de estudiante activa en la institución; decisión que considera violatoria a su derecho fundamental a la

educación; pues lo cierto es que, cumplió con el puntaje requerido en el idioma inglés y, a la fecha de la solicitud de validación del resultado de la prueba saber pro 2021 ya se encontraba activa en la institución, aspectos que no fueron valorados por la institución accionada.

2. EL FALLO IMPUGNADO

Para negar el amparo, el juzgado de primera instancia arguyó que, en virtud de la autonomía universitaria que le asiste al claustro universitario, expidió las resoluciones rectorales No. 1 de 2021 y 3 de 2022, por el cual se reglamenta el requisito de grado del segundo idioma – *ingles*- en el nivel B1, y en lo pertinente dispuso: *“Para los estudiantes matriculados y activos en los programas del nivel universitario, cursando asignaturas de los dos últimos semestres del respectivo programa académico, se les aceptará la prueba saber pro, con resultados en inglés, mínimo en nivel B1 presentadas hasta el año 2021, siempre que sean radicadas máximo hasta el día 30 de abril de 2022 (...).”*

Con sustento en lo anterior, y de las pruebas allegadas al expediente de tutela, concluyó que, en efecto, la accionante no se aviene al cumplimiento de las exigencias antes anotadas, pues para el periodo académico 2021-1 no se encontraba cursando asignaturas de los dos últimos semestres; además según lo expuso la universidad accionada, el último semestre académico lo cursó en el periodo 2019 -1 y el reintegró se hizo efectivo solo hasta el mes de enero de 2022, lo que significa que para los periodos académicos 2019 – 2 al 2022 no estuvo activa en la institución.

De ahí que, la decisión adoptada por el claustro accionado no luce arbitraria, por el contrario, es el resultado de la aplicación del reglamento estudiantil que la rige, sin que por ello se pueda predicar vulneración alguna al derecho fundamental a la educación, pues la inconformidad de la actora radica en las directrices implantadas por la institución.

Igualmente, sostuvo que, la accionante al matricularse a la institución automáticamente aceptó acogerse a los estatutos y reglamentos de la universidad, lo que implica que, no puede pretender eludir el cumplimiento de las cargas y obligaciones que le incumben, siempre y cuando se observen los preceptos constitucionales y legales.

En virtud de lo considerado el *A quo*, negó el amparo deprecado.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, la accionante impugnó la sentencia de primera instancia, manifestando, en síntesis que, la determinación adoptada por el claustro acusado lesiona su derecho a la educación, el cual se encuentra ligado a otras garantías fundamentales como la dignidad humana, el trabajo y el mínimo vital, pues al no obtener el título profesional se ve truncado su proyecto de vida.

Por otra parte, sostuvo que, si bien existe una autonomía universitaria, sobre la cual se fundamenta la potestad de las universidades de emitir sus propios estatutos y definir libremente su organización interna, ésta no es absoluta y se encuentra limitada a las sub reglas que ha definido la H. Corte Constitucional, esto es, al respeto por los mandatos constitucionales y, en especial, a los derechos fundamentales, dentro de los que se destaca el debido proceso.

Y en este caso, la universidad accionada comete un error administrativo, el cual trunca su graduación mediante las constantes modificaciones que realiza a sus estatutos respecto de los requisitos que deben cumplir los estudiantes para acceder a un título profesional, tales como el aumento de materias después de culminar el pensum académico, la no validación del requisito de inglés y exigir dinero para su reingreso.

Con sustento en lo anterior, solicita la revocatoria de la decisión opugnada y, en su lugar se acceda al amparo deprecado.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, a fin de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

4.2. Frente a lo solicitado con la presente queja constitucional y los hechos en que se fundamenta, conviene memorar que, el artículo 67 de la Constitución Política establece, entre otros que, la educación es un derecho de la persona que contiene una función social con la cual se busca el acceso al conocimiento y la formación en varios aspectos.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T 720 del 2012 ha señalado, que es un derecho – deber, que impone obligaciones tanto a las instituciones educativas como a los alumnos que deciden matricularse en las mismas,

es decir, que el estudiante tiene de forma simultánea derechos para exigir y obligaciones que cumplir, pues no solo otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho.

Debe precisarse que, el pleno ejercicio de este derecho, depende del acatamiento y cumplimiento de los deberes y obligaciones que imponen las instituciones educativas en sus reglamentos derivados de su régimen administrativo y disciplinario.

Ahora bien, frente al principio de la autonomía universitaria, el artículo 69 de la Constitución Política consagra una potestad especial a las instituciones de educación superior, en los siguientes términos *“se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”*.

En estos casos, el Máximo Tribunal Constitucional estableció que, a raíz de la garantía constitucional de la autonomía universitaria, las instituciones educativas pueden tomar sus respectivas determinaciones en temas financieros, académicos, disciplinarios, entre otros, pero no significa que tengan libertad absoluta en las mismas, pues bien señala que *“las disposiciones y actuaciones de las universidades deben ajustarse a la Constitución Política y a las leyes. Por consiguiente, si bien este Tribunal ha reconocido como expresión de esa autonomía universitaria la facultad de definir los reglamentos estudiantiles, lo cierto es que éstos tienen como límite, entre otros, la garantía de los derechos fundamentales”* (Sentencia T-041 de 2009).

4.3 Precisado lo anterior, en el caso concreto, la accionante sostiene que su derecho fundamental a la educación y debido proceso, se encuentran transgredidos con el actuar del claustro accionado, al no validar como requisito de grado el nivel de inglés obtenido en el examen Saber Pro que presentó en el año 2021.

Pues bien, de lo expuesto en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al expediente, se observa que en el reglamento estudiantil se estipuló como requisito de grado *“aportar certificación vigente expedida por entidad certificadora, con competencias en inglés nivel B1, según el Marco Común Europeo de referencia para lenguas. El presente literal, será tenido por cumplido para egresados no graduados que hubieren terminado su plan de estudios antes del 2022 -1, siempre que le sea aplicable el artículo segundo (transitorio) de la Resolución Rectoral No. 3 de 2022 y le den expreso cumplimiento”*.

El citado requisito fue reglamentado mediante las resoluciones rectorales No. 1 de 2021 y No. 3 de 2022, la primera disposición es la que pretende la actora se de aplicación por cuanto sostiene el cumplimiento de los requisitos allí previstos. Por lo tanto, compete al juzgado establecer si a la luz de tal precepto, la accionante se avine a su cumplimiento, a fin de dilucidar si la negativa del claustro acusado deviene excesiva y desproporcionada.

Indica, el artículo primero (transitorio): periodos de transición: (...) *II.I. Serán aceptadas las pruebas Saber Pro, con resultados en inglés, mínimo en nivel B1, hasta las pruebas Saber Pro, que se presentaron hasta el año 2020. II.II. Para los estudiantes que en el reciente periodo académico 2021-1 se encontraban en condición de estudiantes matriculados y activos en los programas del nivel universitario, cursando asignaturas de los dos últimos semestres del respectivo programa académico, se les aceptarán la pruebas Saber Pro, con resultados en inglés, mínimo en nivel B1 presentadas hasta el presente año 2021, siempre que sean radicadas máximo hasta el día 30 de abril de 2022”.*

De lo anterior se colige que, para acceder a la pretensión de la promotora del amparo, esto es, el reconocimiento de los resultados obtenidos en la prueba saber pro 2021, el claustro accionado estipuló los siguientes requisitos: **i)** Que el estudiante se encuentre matriculado y activo en los programas universitarios para el periodo académico 2021 -1, **ii)** Que el estudiante se encuentre cursando asignaturas de los dos últimos semestres del respectivo programa académico, **iii)** Que el estudiante haya obtenido en la prueba saber pro un resultado en ingles mínimo en nivel B1 durante el año 2021 y, **iv)** Que la anterior documentación sea radicada a más tardar el 30 de abril de 2022.

Así pues, en el caso particular de la señora CELI TRIANA, se tiene que, cursó su último semestre académico en el periodo 2019-1, y solicitó su reintegro en el mes de enero de 2022, esto significa que no estuvo activa en la institución durante los periodos académicos 2019 -2, 2020 1, 2020- 2, **2021 -1** y 2021 – 2, hecho que evidencia el incumplimiento al primer requisito.

Y si bien la accionante hacia el mes de enero hogaño, se reintegró a la institución educativa, lo cierto es que se encuentra cursando materias de actualización, y no las correspondientes a su pensum académico, en razón a que transcurrió un lapso superior a un (1) año desde el momento en que finalizó su plan de estudios sin que hubiera obtenido el título respectivo, tal y como lo prevé el artículo 135 del reglamento estudiantil.

Así pues, la actora tampoco se avino al cumplimiento del segundo requisito, circunstancia que conlleva a que no pueda ser tenido en cuenta el

resultado obtenido en la prueba saber pro 2021. Decisión que se encuentra debidamente soportada en los reglamentos de la universidad, ente que por demás cuenta con la potestad de establecer y adoptar las normas de funcionamiento y de gestión administrativa que internamente considere pertinente en virtud de la autonomía universitaria que los cobija, sin que sea del resorte del juez constitucional entrar a cuestionar tales requerimientos y metodologías, pues su implementación es de competencia exclusiva de la institución educativa.

En ese sentido, a la accionante no puede dable pretender utilizar la acción de tutela, con el fin de eludir el cumplimiento de los requisitos fijados previamente por el claustro universitario en sus reglamentos internos para obtener el título profesional requerido.

Con todo, este juzgado desestima los reproches que endilga la accionante al ente educativo, referente a la imposición arbitraria e irrazonable de requisitos adicionales a los previamente establecidos, con fines de obstruir su proceso de grado; pues dicha afirmación no tiene asidero alguno, *contrario sensu*, la universidad accionada, acreditó fehacientemente que todas y cada una de las decisiones adoptadas se sustentan en el reglamento interno, el cual conoce la comunidad estudiantil y aceptan los estudiantes al momento de matricularse a la institución, cuyo deber principal es el de observar, respetar y cumplir los mandatos allí previstos.

En ese orden de ideas, no se advierte por este juzgador que la accionada haya incurrido en actuación u omisión que pueda ser considerada como violatoria o ponga en riesgo los derechos fundamentales de la accionante. Al margen de la inconformidad que ésta presenta con relación a las disposiciones que rigen el tema de la validación de las pruebas saber pro en inglés u cualquier otro aspecto atañadero al reglamento estudiantil, pues tal discusión no es de resorte del Juez Constitucional.

5. CONCLUSIÓN

Bajo los anteriores argumentos, se confirmará la decisión opugnada.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2022 por el Juzgado 54 Civil Municipal de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

6.2. NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

L.S.S

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **87c95b1b702328c90dedb7b3a034bf62e5c3a9efe2bad4a1842618a088b3e2b0**

Documento generado en 24/10/2022 09:26:27 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>